

Consideraciones sobre el conflicto armado en el Medellín de los años noventa

Ana María Jaramillo*

Mi propósito en este trabajo es presentar algunos puntos de discusión sobre cultura política y conflictividades urbanas en Medellín, en el marco de una investigación sobre el tema que actualmente desarrolla la Corporación Región y, fundamentalmente, en relación con la fase correspondiente al trabajo de campo.

I

Después de la muerte de Pablo Escobar, la ciudad de Medellín dejó de ser *noticia* para los medios de comunicación, en especial para aquellos interesados en divulgar una versión sensacionalista sobre los episodios de violencia protagonizados por el famoso *patrón* y por su ejército de sicarios. Si bien es cierto que la muerte de Escobar ha representado un alivio para la ciudad y para sus habitantes, que bien podrían ser considerados como sobrevivientes de una época violenta sin precedentes, ella no se ha constituido en un factor decisivo para la pacificación de la ciudad. Aunque se verifica una disminución de los

* Investigadora de la Corporación Región.

índices de muertes violentas, Medellín puede seguir siendo considerada como el ejemplo extremo de una ciudad que experimenta el recurso generalizado a las vías de hecho para dar solución a los diversos tipos de conflictos que tienen lugar en los ámbitos privados y públicos.

En relación con ese ambiente de violencia perviviente, quiero hacer referencia en este texto al tema de la seguridad, un campo de conflicto de gran importancia en las últimas décadas. Desde los años sesenta y debido a factores como la construcción de numerosos barrios de invasión en las laderas de la ciudad, la emergencia de la delincuencia organizada y la amenaza comunista -a la que se le atribuía las alteraciones que se generaban en el orden público-, el asunto de la seguridad empezó a ser considerado como un problema de trascendencia para las autoridades y para los grupos de poder local. Dos décadas después, la inseguridad es reconocida como problema prioritario aún por los habitantes de barrios populares, aunque ahora se la asocia con fenómenos de bandas, masacres, abusos de autoridad cometidos por la fuerza pública, generalización del consumo y comercio de droga y la consecuente aparición de una nueva *clase peligrosa*: los viciosos, valorados como *desechables*.

En aquella década de 1960, la élite empresarial y las autoridades locales -entre quienes predominaba una sensación de escepticismo en relación con la eficacia de las reformas promovidas por el primer gobierno del Frente Nacional en materia de justicia, control del orden público y funcionamiento de la Policía Nacional-, tienden a depositar su confianza en mecanismos tradicionales de control social, como instancias de seguridad sometidas a la autoridad local (Departamento de Seguridad y Control, por ejemplo), y también, en la promoción de organizaciones de autodefensa con el concurso de las *gentes de bien* (así, se crea la Defensa Civil y se promueven en los barrios comités de seguridad que cuentan con el respaldo de las Juntas de Acción Comunal).

En el decenio de 1980 se observa un desprestigio generalizado de la justicia y de las instituciones encargadas del control del orden

público, incluido el Departamento de Seguridad y Control -ahora denominado Departamento de Orden Ciudadano-, y la proliferación de organizaciones de autodefensa que operan con o sin el consentimiento oficial. Este último tipo de organizaciones que actúa bajo el control de actores armados dedicados a imponer seguridad mediante el exterminio de todo aquel que sea considerado como amenaza, dirige su acción al restablecimiento de un orden moral y social, interviniendo en la solución de conflictos familiares o vecinales y, aún, en la reglamentación de formas de comportamiento en la vida cotidiana barrial.

II

La construcción de seguridad y orden, mediante el concurso de actores armados, ha hecho de los barrios populares un escenario de guerras de baja intensidad, visibles en momentos límites, cuando se producen enfrentamientos, operativos militares o policiales, masacres, o, inclusive, cuando se logra un cese al fuego y se concretan pactos de convivencia.

Aunque estas *microguerras* no son un fenómeno nuevo, en lo que va de la presente década se han intensificado debido, al parecer, al incremento de los niveles de competencia entre actores cada vez más fragmentados y portadores de un creciente interés por el control de territorios y población. Por esto, es necesario advertir los cambios que se han presentado en la situación de algunos actores armados en la ciudad.

Ante el abandono de la función de seguridad propia del Estado, el decenio de 1980 culmina con el auge de las milicias, las cuales se definen a sí mismas como una alternativa de las comunidades para enfrentar a las bandas y a los delincuentes individuales. En 1994 se produce un cambio en la actitud frente al Estado, en los grupos más representativos de las milicias -los cuales controlan una amplia zona en la Comuna Nororiental-. En ese año se realiza un proceso de negociación a partir del cual algunos grupos milicianos buscan una mayor

atención del Estado, que se manifieste en inversión social para las comunidades ubicadas en sus zonas de influencia, en su proyección como actores políticos y en el reconocimiento institucional de su labor de vigilancia. Este proceso culmina con la creación de una cooperativa de vigilancia: Coosercom.

Sin embargo, por circunstancias que deberán ser objeto de otro análisis, los resultados finales del proceso poco tienen que ver con lo finalmente pactado. El fracaso de este proceso no ha implicado una total pérdida de la vigencia política del proyecto miliciano, pero sí su mayor fragmentación. Actualmente se evidencia una expansión de las milicias que no estuvieron involucradas en aquel proceso de negociación, la aparición de otros grupos que se presentan como milicianos y, también, algunos intentos de reconstitución de las milicias que hicieron parte de los acuerdos de reinsertión.

Lo anterior insinúa la existencia de un panorama heterogéneo que, por su naturaleza, demuestra cómo la expansión de los grupos milicianos no puede ser considerada simplemente la materialización del proyecto de construcción de una guerrilla urbana. En el caso de Medellín es necesario tener en cuenta, además, que el surgimiento de las milicias fue resultado no sólo de planes de proyección urbana de fuerzas pertenecientes a la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), sino de la iniciativa propia de pobladores y de exmilitantes de la misma guerrilla.

Este panorama heterogéneo se evidencia en la diversa amplitud y localización de los territorios urbanos con presencia de los grupos milicianos, así como en los variables márgenes de legitimidad que éstos han logrado. La presencia de las milicias es predominante en zonas periféricas, precisamente donde actúan bandas delincuenciales que, paradójicamente, constituyen el principal factor de contención a la expansión miliciano. En relación con la legitimidad de las milicias, mientras en la zona nororiental un sector de la población manifiesta su descontento con los grupos reinsertados (por medio de denuncias

presentadas a diversas instancias del Estado), en otros lugares la población se muestra satisfecha con su presencia.

bandas

De otro lado, las bandas también presentan algunos cambios. La desarticulación de la estructura militar al servicio de Pablo Escobar dio lugar a una recomposición de las bandas. La desaparición de algunas de ellas se ha compensado con la aparición de otras, no menos poderosas, dedicadas al secuestro, al sicariato o al robo de vehículos. Este es el caso de la banda La Terraza, cuyo epicentro es el barrio Manrique y que cuenta con ramificaciones en diferentes sitios del Área Metropolitana. Se afirma que está conformada por más de un centenar de jóvenes, incluidos quienes cuentan con una experiencia adquirida en la guerrilla, en el narcotráfico o en las milicias, lo cual pone de manifiesto un campo fluido de relaciones entre diversos actores de violencia.

Igualmente, puede advertirse la existencia de alianzas entre bandas, así como el surgimiento de algunos grupos de barrio que operan al servicio de bandas más poderosas. Recientemente se denuncia la aparición de alianzas de bandas con paramilitares, para combatir a sus principal enemigo: las milicias.

De otra parte, se ha dado un desplazamiento de bandas hacia lo social, a partir, en buena medida, del clima propiciado por pactos de convivencia impulsados por la Iglesia, por algunas organizaciones sociales y por programas de la administración municipal. Ello ha permitido que algunas bandas sigan el camino de las milicias en su búsqueda de legitimidad social, mediante la prestación de servicios de vigilancia en sus respectivas zonas de influencia y como intermediarios ante algunas instancias del Estado. Por esta vía, algunos integrantes de bandas se han proyectado como líderes sociales y promotores de convivencia, pero igual que en el caso de los milicianos de Coosercom, el accionar público los hace vulnerables ante sus enemigos.

En esta zona gris, en donde los grupos referidos no tienen el perfil de bandas pero tampoco el de guerrillas, surgen algunos grupos de autodefensa que han logrado, en medio de la confrontación entre

bandas y milicias, el control de pequeños territorios. Estas autodefensas renuncian a toda pretensión de expansión; sólo tienen interés en hacer respetar su espacio y en prestar servicios de vigilancia sin tener que recurrir a la limpieza social. No hay siquiera en ellos un interés por intervenir en la solución de conflictos familiares o vecinales. La constante presión ejercida por las bandas, que los consideran milicianos, o por las milicias, que definen a sus integrantes como bandidos, hace difícil esperar la supervivencia de estos grupos, tal y como están configurados actualmente. En el accionar de estos grupos -inmersos en procesos que se encuentran en una fase incipiente-, se adivina una pérdida de fronteras entre lo delincuencial y lo político, lo cual es importante considerar ante la eventualidad de nuevos procesos de negociación en la ciudad.

III

La permanencia de actores armados en los barrios no sólo es el fruto de su capacidad de intimidación sobre la población; ello tiene mucho que ver con el deterioro de los lazos primarios de sociabilidad y con la generación de un clima de desconfianza y de rivalidades mutuas entre vecinos de una misma cuadra, entre barrios y entre líderes sociales. La presencia del actor armado es entonces requerida por el servicio de vigilancia que presta en el barrio o por la demanda de sujetos particulares que necesitan protección contra alguna amenaza cercana. Lo que es reconocido como protección, puede convertirse, sin embargo, un momento después, en su contrario. Ejemplo de ello es la actitud de algunos pobladores que hace algunos años fueron una base de apoyo para las milicias y que ahora prefieren respaldar a otros actores, debido al descontento con el pago de *vacunas*, con las restricciones a la movilidad o con las amenazas frecuentes.

IV

El ambiente de desconfianza en los barrios, agravado por la acción de algunos actores armados, ha tenido un impacto negativo

orig content

sobre el tejido social, aunque no ha logrado eliminar la existencia de una variada red de organizaciones comunitarias. En el decenio de 1980, en medio de las masacres, de los atentados terroristas y de las desapariciones forzadas, las juntas de acción comunal, las organizaciones culturales y deportivas, las asociaciones mutuales, los grupos religiosos y las organizaciones no gubernamentales continuaron funcionando. No se puede pasar por alto la vigencia de una tradición asociativa promovida por la Iglesia y por la élite empresarial desde la primera mitad del siglo XX, ni la incidencia positiva de estrategias promotoras de participación impulsadas por algunas secretarías de la administración municipal y por la Consejería Presidencial para Medellín. No obstante, estos grupos se mantienen en una situación de fragmentación y de divorcio con respecto a la esfera política, lo cual limita sus posibilidades de proyección social y política y los hace más vulnerables a presiones ejercidas por actores armados que se proponen la "toma" de estas organizaciones o la obstaculización de su funcionamiento mediante amenazas o asesinatos.

V

Los límites entre la guerra y la paz también se han hecho mas fluidos. La confrontación armada tiene como contrapartida las permanentes transacciones entre amigos y enemigos y el establecimiento de pactos de convivencia que se han hecho cada vez más frecuentes en los barrios de la ciudad. En este proceso se ha ampliado una red de intermediarios, ligados o no a entidades sociales o gubernamentales, convertidos en expertos en el arte de traer y llevar mensajes, de crear escenarios de encuentro y de tratar de garantizar la vigencia de unos pactos cuyo denominador común es el respeto de los territorios y la interrupción de actividades delictivas en la misma zona. Estos pactos, aunque frágiles y parciales, han creado un ambiente de convivencia en algunos barrios, pero al mismo tiempo han generado un incremento de la inseguridad en las zonas que no quedan cubiertas por éstos y que se convierten en escenario para la realización de robos, secuestros o asesinatos por parte de las bandas.

VI

Estado

Este cotidiano discurrir de la guerra y de la paz no ha sido un fenómeno extraño al Estado. Por el contrario, éste ha permanecido presente, sólo que como un actor mas y realizando un papel contradictorio.

En el ámbito departamental, el gobernador Alvaro Uribe Vélez inició su administración con una propuesta de pedagogía de la tolerancia, que perdió peso ante la puesta en marcha de las Asociaciones de Vigilancia Rural (Convivir), que expandieron su radio de acción a la ciudad de Medellín. Esta iniciativa, se contraponen a los objetivos de los programas de convivencia formulados por la Alcaldía y por la Oficina de Reinserción del gobierno nacional con sede en la ciudad. El Estado tampoco ha sido, pues, ajeno a una dinámica de fragmentación y de enfrentamientos entre diversas instancias, lo que ha limitado su eficacia y ha contribuido a la proyección de una imagen negativa: la del Estado "faltón", que se rige por sus propios intereses y no por los del bien común.

*Ejército
Policía*

No menos problemática ha sido la intervención de otras dos instancias institucionales cercanas a los conflictos barriales: el Ejército y la Policía. Todo parece indicar que estas dos fuerzas no han podido sustraerse totalmente a las lógicas del conflicto. A partir del decenio de 1980 el Ejército intenta una nueva forma de intervención en el conflicto armado en los barrios, con la instalación de bases militares en algunos de los lugares mas afectados por la confrontación entre bandas o entre bandas y milicias. Tal iniciativa contó con el respaldo de los habitantes de estos barrios. Aunque en un principio se creo un clima de apaciguamiento, con el tiempo la estrategia, en algunos lugares, se ha convertido en un motivo de zozobra, dada la tendencia a la parcialización del Ejército en favor de las bandas y en contra de las milicias.

Con respecto a la Policía habría que preguntarse sobre el impacto que han tenido las estrategias de modernización de esta entidad en sus

formas de actuación y en la legitimidad de su acción. Aunque la demanda social por la presencia policial sigue siendo una constante y se han puesto en prácticas nuevas estrategias de acercamiento entre los jóvenes y la Policía, en los habitantes de los barrios populares predomina una imagen negativa producida por los atropellos cometidos en operativos, por el cobro de impuestos a los expendios de droga o por el contrabando de armas. La Policía es vista como amiga o enemiga, según las alianzas que establezca con los demás actores de la guerra: bandas, milicias, paramilitares o escuadrones de la muerte.

El Estado, igualmente, ha hecho presencia en los barrios mediante la gestión de las inspecciones de policía y, más recientemente, de las comisarías de familia, en la resolución pacífica de conflictos cotidianos. Pese a la competencia establecida por los actores armados, algunos sectores de la población no han dejado de acudir a este tipo de instancias, sobre todo para la atención de problemas que requieren ciertos trámites legales. Contrariamente a lo que se puede pensar, Medellín se destaca por ser la ciudad en la que los delitos son denunciados con mayor frecuencia ante las autoridades, no obstante que al mismo tiempo presenta los más altos índices de temor en relación con esa actividad de denuncia.¹

VII

Ahora bien, el panorama descrito hasta el momento no es exclusivo de los barrios populares de la ciudad. En el campo conflictivo de la inseguridad es posible establecer similitudes entre éstos barrios y los de clase media y alta. Los habitantes tradicionales del exclusivo sector de El Poblado, por ejemplo, coinciden con los habitantes de los barrios de la Comuna Nororiental en denunciar la aparición de los expendios de droga, de bandas y de *viciosos*, como un factor de

1. Véase: Mauricio Rubio. *Inseguridad y conflictos en las ciudades colombianas*. Santafé de Bogotá, Cede - Universidad de los Andes, 1996.

deterioro del entorno barrial, como una grave amenaza en su vida cotidiana. Estos barrios también se identifican porque, para enfrentar sus respectivos problemas de seguridad, apelan a la autodefensa, a través del servicio de la vigilancia privada, más que a las autoridades legalmente constituidas. Tampoco se puede olvidar que numerosos barrios de clase media y alta fueron afectados en la época de persecución contra Pablo Escobar, tanto por atentados terroristas, como por los operativos del bloque de búsqueda. Estas similitudes, de algún modo, contribuyen a desvirtuar la imagen de una ciudad bifurcada, en la que una parte de la población vive al margen y otra en los marcos del orden y de la ley.

Por todo lo anterior, considero prioritario insistir en la creación de una conciencia pública en torno a problemas que siendo públicos tienden a ser asumidos como un asunto privado. Se requiere la construcción de un consenso en torno a unas estrategias de convivencia que tengan en cuenta las particularidades del conflicto armado en las ciudades. La negociación con la guerrilla o con los paramilitares, sin duda sería un factor desactivante del conflicto armado en la ciudad, pero tampoco sería condición suficiente.